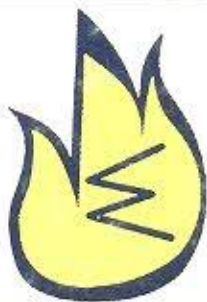


# Revista Energética



# Energy Magazine

Año 17  
número 3  
sept. - dic. 1993

Year 17  
number 3  
Sep. - Dec. 1993



Tema: **OLADE: 20 años de impulso a la integración energética de América Latina y El Caribe**

Topic: **OLADE: 20 Years Promoting the Energy Integration of Latin America and the Caribbean**



# El Acuerdo de San José

Alberto Valero\*

Los comentarios adversos que, en los primeros tiempos, se formularon al Programa de Cooperación Energética para Centroamérica y El Caribe, mejor conocido como Acuerdo de San José, parecen haber amainado, según se comprendieron mejor sus objetivos y los mutuos beneficios que para todos los Estados participantes ha significado su instrumentación a partir del 3 de agosto de 1980.

Un poco de historia es adecuado para recordar el ambiente que rodeó entonces la reunión de los presidentes José López Portillo de México y Luis Herrera Campíns de Venezuela, convocados por su homólogo costarricense Rodrigo Carazo para procurar medidas orientadas a aliviar el impacto que sobre las economías regionales ejercía el precio de las importaciones petroleras.

El Acuerdo iba a constituirse en la ampliación de las Facilidades de Puerto Ordaz, que Venezuela otorgaba a los países de la zona desde 1975, para mitigar el alza repentina de las cotizaciones petroleras por la Guerra de los Seis Días y del incremento adicional que trajo aparejado el derrocamiento del Sha Reza Pahlevi y la desaparición del crudo iraní del mercado internacional.

Vale decir que los precios se habían cuadruplicado desde 1973, cuando los Jefes del Estado de los productores petroleros más importantes del área caribeña decidieron echar

adelante un esquema de clara vocación integracionista sobre un panorama que entonces, aún más que ahora, se caracterizaba por la violencia política.

Era evidente una oleada de contestación en el entorno antillano que, de no hallar salidas institucionales, podía haberse extendido a México y Venezuela, las democracias de tradición más antigua en la Región. Se vivía un instante explosivo (cuyas razones eran fácilmente identificables en la miseria, la injusticia y la marginalidad de las grandes masas), al cual se buscó solución política a través del Grupo de Contadora y, en lo económico, mediante el apoyo energético que, junto con asegurar el suministro petrolero, proporcionaba una ayuda financiera a destinarse a los proyectos de desarrollo y respaldo a la balanza de pago de los Estados beneficiarios.

## El Primer Acuerdo

El primer Acuerdo atendía el consumo interno neto petrolero de origen importado, destinando un volumen total de hasta 160.000 barriles diarios a los cuales se aplicaba un financiamiento a través de entidades oficiales de México y Venezuela.

Los suministros se efectuarían con arreglo a contratos comerciales que ambos países firmarían por separado con los beneficiarios, y se regirían por las políticas y prácticas comerciales usuales en ambos países, incluyendo

las relativas a calidades disponibles y a los precios de venta en sus respectivos mercados internacionales.

A partir del 3 de agosto de 1980 y hasta el 2 de agosto de 1983, se otorgó financiamiento por el 30% de la factura petrolera a un plazo de 5 años y a una tasa fija de interés del 4% anual. Un financiamiento que era susceptible de ampliarse hasta 20 años con una tasa del 2% anual, siempre que los recursos se destinaran a proyectos de desarrollo económico, principalmente en lo referente al sector energético.

Desde 1983 hasta la fecha, el financiamiento disminuyó del 30% al 20% de la factura petrolera y la tasa de interés se incrementó del 4% al 8%. Para el financiamiento de proyectos de desarrollo, la tasa aumentó del 2% al 6%.

Por otro lado, a partir de agosto de 1984, se estableció la modalidad de pago anticipado por el 100% del valor estimado de la factura o carta de crédito confirmada, reintegrando posteriormente al beneficiario el 20% del valor de la misma para constituir el financiamiento.

\* Encargado de Negocios ad hoc de Venezuela en Namibia; ex Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela; y ex Director de Cooperación para Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

## 1985-1989

A partir del 3 de octubre de 1985, se modificó nuevamente el Programa, en el sentido de que el 20% del valor de la factura, que antes se financiaba en forma automática, se retendría para apoyar el intercambio comercial de productos y/o proyectos de desarrollo económico con créditos a una tasa del 8% anual hasta por 5 años y en proyectos de largo plazo hasta 12 años a una tasa anual del 6%.

En agosto de 1986, se decidió mantener por séptimo año la operación del Acuerdo, bajo los mismos términos que el año anterior, excepto que el financiamiento de largo plazo se redujo de 15 a 12 años.

Tales condiciones rigieron, invariables, hasta 1990.

## 1990

La renovación de agosto de 1990 coincidió con la invasión de Kuwait por las tropas iraquíes y una elevación momentánea de los precios, que motivó las gestiones de los países beneficiarios del Acuerdo para recibir de México y Venezuela un tratamiento de excepción en tanto durase la difícil coyuntura.

Una vez más, pese al margen de maniobra tan estrecho de que disponían ambos suministradores, a causa de sus respectivos programas de reestructuración económica, instruyeron al Comité Binacional de Seguimiento, que se había creado un año antes, de estudiar opciones que permitiesen algún respiro a los gobiernos del área.

Fueron semanas de intensas consultas en Caracas y Ciudad de México, en el marco de una situación internacional cada vez más ominosa,

tras las cuales se ratificaron los términos del Acuerdo, asegurando el suministro estable a precios de mercado y estableciendo un precio de US\$21 por barril, por encima del cual operaría un mecanismo temporal de apoyo financiero.

### Un Mecanismo Original

En virtud de esta fórmula, México otorgaría un financiamiento en condiciones comerciales por un monto equivalente al 30% de la factura petrolera, a una tasa de interés del mercado y por un plazo de hasta seis meses, de los embarques que los países beneficiarios realizaran hasta el 31 de diciembre de 1990.

Venezuela, por su parte, otorgaría un financiamiento por un monto equivalente al 30% de la factura a tasa del mercado y por un plazo de hasta seis meses, o bien mediante un depósito a la misma tasa y período, en el Banco Central de cada país, por un monto equivalente al 50% de la factura petrolera adicional derivada de un precio superior al citado, ambos por los embarques que se efectuasen hasta el cierre del año.

México y Venezuela resolvieron, asimismo, fijar un precio de US\$18 por barril, como nivel por debajo del cual dejaría de financiarse la factura petrolera, e instruyeron a PEMEX y PDVSA para que otorgaran facilidades operativas, en términos de prioridad de embarques y flexibilidad para el cambio de mezclas, entre otros, a los países beneficiarios.

### Después de Kuwait

Cerrado el capítulo de la Guerra del Golfo, el Acuerdo se renovó en agosto de 1991, en condiciones que implicaron modificaciones sustanciales

en el espíritu del Programa y en la forma como había actuado desde su fundación.

El propósito básico que animó entonces, es decir, la consolidación de una democracia regional a cubierto de los rigores de las cotizaciones petroleras en aumento, había sido reforzado, en 1988, con una cláusula que amenazaba la suspensión de los envíos de hidrocarburos a los países que emprendieran acciones militares contra cualquiera de sus vecinos.

Pero en 1991 se habían acumulado numerosos factores que obligaron a los negociadores del Comité Binacional de Seguimiento a la armonización de enfoques discrepantes que surgían de las condiciones propias de cada país.

Se decidió, en fin, volver a la cifra original de 160,000 barriles diarios, incorporando así los embarques iniciados por Venezuela a Nicaragua y Haití desde 1990 y conservando un cierto margen para eventuales solicitudes por parte de otros gobiernos.

La admisión de Haití a petición de Venezuela vino, por cierto, a cerrar un episodio penoso en la historia del Acuerdo, que forzó la exclusión del régimen duvalierista en los albores mismos del Programa; pero el derrocamiento del presidente Aristide obligó, diez meses más tarde, a excluir a la isla caribeña de los países beneficiarios.

Motivo de especial discusión fue el planteamiento mexicano de colocar en manos del Banco Centroamericano de Integración Económica el manejo de los créditos derivados del suministro petrolero, a fin de limitar e incluso erradicar la situación crónica de mora en que se hallaban algunos países.



Después de varias discusiones se optó por una solución salomónica que dejó a México y Venezuela la facultad de administrar en forma autónoma la parte financiera del Acuerdo, toda vez que, según nuestra experiencia, el Fondo de Inversiones había sido un instrumento eficaz y no se justificaba el recurrir a otras instancias.

En esa duodécima renovación, también, a solicitud de México, se adoptó la indexación del financiamiento al precio del barril petrolero en el mercado mundial y se fijó una escala que otorgaba una ayuda crediticia adicional a medida que se elevaban los precios, pero asimismo se marcaba un piso bajo el cual se exoneraba a los países suministradores de un financiamiento que, en la práctica, iba a derivarse del precio deprimido de las exportaciones.

Este esquema se ha conservado en las sucesivas renovaciones de 1992 y 1993.

### En Resumen

La firma del Acuerdo de San José y la voluntad política que ha hecho posible su vigencia año tras años, a pesar de las vicisitudes que México y Venezuela han atravesado en su realidad doméstica, quedan como uno de los ejemplos más estimulantes de solidaridad y cooperación entre países

en desarrollo.

Hasta la suscripción de un mecanismo similar en 1985 figuraba entre los objetivos de los Estados agrupados en la Asociación de Países Petroleros Africanos (APPA) fundado en Argelia en mayo de aquel año.

Ha sido expresión de una constante y más profunda comprensión bilateral entre los dos Estados de mayor peso económico en la cuenca antillana; ha facilitado la armonización de estrategias comerciales, sin las cuales hubieran enfrentado una ruinosa competencia en el mercado petrolero que les es común y vital; y está en la base de los notables avances que registra el llamado Grupo de los Tres desde su creación, en marzo de 1989, en una diversidad de dominios.

El Acuerdo ha propiciado, igualmente, un flujo comercial de mayor importancia en la zona caribeña y, a pesar de las críticas que aún se dejan escuchar sobre el presunto perjuicio que significaría la carga crediticia para los países prestatarios, puede afirmarse que su instrumentación ha permitido, en el caso venezolano, el acceso de más de 40 empresas a proyectos de infraestructura regionales.

También ha generado el cuadro de comprensión indispensable para una

mayor presencia de PEMEX y PDVSA. Así la compañía estatal venezolana ha suscrito, durante la presente administración, convenios de prospección con Guatemala y Honduras y de suministro de derivados petroleros a Nicaragua, con la cual se negociaba asimismo un programa exploratorio.

Tuve la oportunidad de coordinar por Venezuela los trabajos del Acuerdo entre 1984 y 1991 y el privilegio de tejer con funcionarios mexicanos un diálogo intenso, dentro del respeto más absoluto y la mayor cordialidad.

La armonización de intereses tan particulares en el ámbito interno y, luego en las negociaciones bilaterales, de los aspectos geopolíticos, petroleros y financieros envueltos en el Acuerdo de San José fue, durante ocho años sucesivos, una fuente de estímulo y un reto fascinante, del que salimos airosos gracias a la camaradería de que ambos equipos hicieron gala, siempre, hasta en los momentos más conflictivos.

Actuaba en todos nosotros, estoy seguro, la convicción de jugar un papel, si bien modesto, en el afianzamiento de los vínculos bilaterales mexicano-venezolanos y la integración de los pueblos del área de Centroamérica y El Caribe. ☺

# San José Accord

Alberto Valero\*

The adverse comments which at first had been formulated against the Central American and the Caribbean Energy Cooperation Program, more widely known as the San José Accord, seem to have receded, as its objectives have become better known and its mutual benefits for all the participating States have grown since its implementation on August 3, 1980.

A bit of history is required to recall the events surrounding the meeting which at that time took place between the President of Mexico, José López-Portillo, and the President of Venezuela, Luis Herrera-Campíns, brought together by their Costa Rican counterpart, Rodrigo Carazo, in order to find measures that would help to mitigate the impact of rising oil import prices on regional economies.

The Accord intended to enlarge the Puerto Ordaz facilities that Venezuela had been granting to the area's countries for their use since 1975, in order to mitigate the steep rise of oil prices as a result of the Six-Day War and the additional hike that occurred when Shah Reza Pahlavi was overthrown and Iranian crude oil disappeared from the international market.

It should be mentioned that prices had increased fourfold since 1973, when the Heads of State of the most important oil-producing countries in the Caribbean area decided to promote a clearly integrative scheme

within a situation that, even more so than now, was characterized by political violence.

It was evident that there was a wave of protest in the Antilles; if it was not channeled through appropriate institutions, it could well extend to Mexico and Venezuela, the democracies of the Region with the longest tradition. An explosive situation was therefore being experienced (its reasons were easy to identify and included poverty, injustice, and the marginality of most of the population). The Contadora Group therefore attempted to provide a political solution for this situation, whereas the economic problems were tackled by an energy support scheme, which in addition to ensuring oil supplies provided financial assistance for the implementation of development projects and support for the balance-of-payments problems of the beneficiary States.

## The First Accord

The first Accord dealt with the net domestic consumption of imported oil, for a total volume of up to 160,000 barrels per day, which were financed through official public entities of Mexico and Venezuela.

The oil was supplied on the basis of commercial contracts that would be signed by both supplier countries separately with the beneficiaries. They would be governed by the usual

commercial policies and practices in both countries, including those referring to available qualities and the sale prices on their respective world markets.

Beginning on August 3, 1980 and up until August 2, 1983, financing was granted for 30% of the oil bill over a five-year period and at a fixed yearly interest rate of 4%. This financing could be extended to 20 years with a rate of 2% per year, as long as the resources were aimed at economic development projects, mainly those focusing on the energy sector.

From 1983 to the present, financing declined from 30% to 20% of the oil bill, and the interest rate increased from 4% to 8%. For financing development projects, the rate rose from 2% to 6%.

Moreover, starting in August 1984, an advance payment modality was established; it entailed advance payment of 100% of the estimated value of the bill or confirmed letter of credit, with restitution afterwards of 20% of this amount for financing purposes.

\* Ad Hoc Chargé d'affaires of Venezuela in Namibia, former Director of International Affairs of the Ministry of Energy and Mines of Venezuela, and former Director of Cooperation for Central America and the Caribbean of the Ministry of Foreign Affairs of Venezuela.

## 1985-1989

Beginning on October 3, 1985, the Program was once again modified so that the 20% of the bill's amount, which previously had been financed automatically, would be retained to support the trade of products and/or economic development projects with credit lines at a rate of 8% per year for up to 5 years and long-term projects up to 12 years at an annual rate of 6%.

In August 1986, it was decided that the Accord's operations would continue for the seventh consecutive year, with the same terms as those of the preceding year, except that the long-term financing was reduced from 15 to 12 years.

These conditions remained unchanged until 1990.

## 1990

The Program's renewal in August 1990 coincided with the invasion of Kuwait by Iraqi troops and a temporary upward shift of prices, which motivated the Accord's beneficiary countries to negotiate with Mexico and Venezuela a special treatment as long as this difficult situation prevailed.

Once again, despite the limited maneuverability available to both suppliers because of their domestic economic restructuring plans, both countries instructed the Binational Follow-up Committee, which had been set up a year earlier, to study options that would allow the governments of the area to find some relief from the tight market situation.

Weeks of intense consultations took place in Caracas and Mexico City within an increasingly ominous international context. The terms of the

Accord were ratified and a stable supply of oil at market prices was ensured, with a price of US\$21 per barrel; when the price of oil climbed above this level, a temporary financial support mechanism would be triggered.

### An Original Mechanism

As a result of this formula, Mexico would grant financing under commercial conditions for an amount equal to 30% of the oil bill at a market interest rate and for a term of up to six months for shipments that the beneficiary countries would make until December 31, 1990.

Venezuela, in turn, would grant financing for an amount equal to 30% of the bill at a market rate and for a period of up to six months or through a deposit, at the same rate and over the same period, in the Central Bank of each country, for an amount equal to 50% of the additional oil bill stemming from a price higher than the one referred to above, both for shipments that might be made up to the end of the year.

Mexico and Venezuela also resolved to set a floor price of US\$18 per barrel, below which the oil bill would no longer be financed. They instructed PEMEX and PDVSA to grant operational facilities in terms of shipment priority and flexibility for the change of mixes, among others, to the beneficiary countries.

### After Kuwait

Once concluded the Gulf war episode, the Accord was renewed in August 1991, but under conditions that implied considerable modifications to the Program's spirit and in the way it had functioned since its creation.

The basic purpose that had inspired the Program at that time, that is, the consolidation of regional democracy and protection against constraints stemming from rising oil prices, had been reinforced in 1988, with a clause that threatened to suspend the dispatch of hydrocarbons to countries that undertook armed actions against any of their neighbors.

But in 1991, various factors had accumulated obliging the negotiators of the Binational Follow-up Committee to reconcile the different approaches stemming from the conditions of each country.

It was finally decided to return to the original figure of 160,000 barrels per day, thus incorporating the shipments initiated by Venezuela to Nicaragua and Haiti since 1990 and maintaining a certain margin for eventual requests by the other governments.

The admission of Haiti into the Program, at the request of Venezuela, led to the end of a regrettable episode in the Accord's history: the exclusion of the Duvalier regime at the very start of the Program. Overthrow of President Aristide ten months later, however, forced the Program to exclude once again this Caribbean island as a beneficiary country.

The Mexican proposal to put the Central American Integration Bank in charge of managing the credit stemming from energy supplies in order to limit or even eliminate the chronic arrears of several countries was the focus of a special discussion.

After various discussions, a Solomonic decision was reached, whereby Mexico and Venezuela would be entitled to administer autonomously the financial part of the Accord, al-

though according to our experience, the Investment Fund had been an effective instrument and there was no substantial reason for resorting to other agencies.

In this twelfth renewal of the Accord, also at the request of Mexico, a financing scheme indexed to the price of the barrel of oil on the world market was adopted, and a scale that granted additional credit assistance was established as prices rose. At the same time, however, a floor below which the supplier countries were exempt from providing financing, which in practical terms would result from the depressed price of exports, was set.

This scheme has been maintained for the successive renewals of 1992 and 1993.

### Summary

Signature of the San José Accord and the political will that has ensured its validity over the years, despite the vicissitudes experienced by Mexico and Venezuela in their internal affairs, have emerged as one of the most encouraging examples of developing country solidarity and cooperation.

This example has also inspired one of the objectives of the States that

came together in 1985 in Algeria to create the Association of African Petroleum-Producing Countries (AAPC), namely, the subscription of a similar mechanism.

It is the outcome of an ongoing and thorough bilateral understanding between the two major economies of the Antilles basin, that is, Mexico and Venezuela, and has facilitated the harmonization of trade strategies. Without the Accord, these countries would have faced disastrous competition on the oil market they share and which is crucial for their economies. Likewise, it is the basis for the breakthroughs made by the so-called Group of Three since its creation in March 1989 in a variety of fields.

The Accord has also fostered wider trade in the Caribbean area and despite the criticism that can still be heard on the supposed damage that this credit burden would entail for the borrowing countries, it can be asserted that its implementation has permitted, in the case of Venezuela, the access of more than 40 enterprises to regional infrastructure projects.

It has also generated the understanding indispensable for establishing a broader presence of PEMEX and PDVSA. Thus, the Venezuelan state

company has subscribed, during the present administration, exploration agreements with Guatemala and Honduras and the supply of oil products to Nicaragua, with which an exploratory program was also negotiated.

I had the opportunity to coordinate on behalf of Venezuela the work involved in the Accord between 1984 and 1991, and I had the privilege of working out an intense dialogue with Mexican officials, a dialogue imbued with the spirit of mutual respect and cordiality.

The reconciliation of so many special interests in the domestic sphere and then the coordination of all the geopolitical, oil, and financial aspects involved in the San José Accord in the bilateral negotiations were, over eight successive years, a source of much stimulation and a fascinating challenge. We have emerged from this experience with flying colors, due to the comradeship displayed by both teams, at all times, even during the most difficult conflicts.

I am sure that we were all deeply convinced of performing a role, although modest, in consolidating the bilateral links between Mexico and Venezuela and the integration of the peoples of Central America and the Caribbean. 